

**NOMENCLATURA** : 1. [40]Sentencia  
**JUZGADO** : 4º Juzgado Civil de Santiago  
**CAUSA ROL** : C-18505-2023  
**CARATULADO** : CORREA/CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO - FISCO DE CHILE

**Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro**

**VISTO.**

**A folio 1** comparecen los abogados Hugo Gutiérrez Gálvez, Ramiro Ignacio Gutiérrez Acuña y Yolanda Berena Milanca Nahuelhuaique, todos domiciliados en Paseo Bulnes N° 216, oficina 901, comuna de Santiago, en representación de MARIA ANGÉLICA CORREA CABRERA, psicóloga, con domicilio en Federico Scotto N° 080, Población Ruiz Tagle, comuna de Estación Central, e interponen demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, en contra del FISCO DE CHILE, representado legalmente -en su calidad de presidente del Consejo de Defensa del Estado- por don Raúl Letelier Wartenberg abogado, ambos domiciliados en Agustinas N° 1225, piso 4° comuna de Santiago, a objeto que sea condenado al pago de la suma de \$350.000.000, en favor de su representado, o a la suma que se considere en justicia según los parámetros del derecho internacional y la legislación nacional pertinente, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

Insertan relato de doña María Correa Cabrera, el cual es del siguiente tenor:

Manifiesta que fue detenida el día 26 de julio de 1975, siendo menor de edad, por efectivos de carabineros vestidos de civil en el domicilio de sus padres ubicado en la calle Capitán Gálvez N° 4457, a la época comuna de Santiago hoy Estación Central. Eran tres efectivos que Le preguntaron su nombre, la sacaron de su domicilio y la subieron a un Fiat 600 de color blanco. Cuando la subieron a este vehículo la pusieron al medio de dos hombres, le colocaron scotch en los ojos y la tiraron con la cabeza abajo, llevándola a la calle 18, lo que posteriormente supo que se trataba de un centro de detención y tortura llamado la Firma que eran dependencias del ex Diario El Clarín.

Refiere que en ese lugar la bajaron junto a otra persona que iban en calidad de detenidas, caminaron y las hacen pasar por una especie de hoyo a una sala grande en donde la sientan en una silla, se acerca una persona y le revisa los bolsillos del pantalón y saca su cédula de identidad, escucha que comentan algo y se lo regresan, se sienta nuevamente en la silla amarrada. Le preguntan sus datos y le dicen que es la "silla de la verdad". Alrededor se sentía un gran movimiento de personas. Luego se acerca una persona y la levanta para ponerle una venda, trató de sacarse el scotch y comienzan a golpearla, al rato la levantan y la van a tirar a una pieza en donde había más personas, una de ellas llorando, cae de rodillas y queda en esa posición, al rato llegan más personas y pasaron la noche ahí sentadas en el suelo, mientras llegaban más personas, al parecer solo mujeres.

Relata que al día siguiente alguien grita que viene el jefe, se sienten pasos fuertes y gritos e insultos hacia ellas. Siente que alguien se acerca y la para tirándole del pelo, el hombre era más bajo que ella, la arrastra a una sala chiquita e inmediatamente comienzan los golpes y los insultos y le preguntan desde cuando que era comunista con golpes de pies y puños, la toman dos hombres y la sientan en una especie de escritorio, la tiran hacia tras y a tirones le sacan los pantalones y los calzones, no sabe que pasó con sus zapatos, pero estaba sin ellos, le abren las piernas y le introducen algo en la vagina y comienza el primer golpe de corriente preguntándole cuantos comunistas eran, por cada pregunta era un golpe de corriente, no recuerda cuanto duró esa sesión de tortura. Pero algo pasó, entró una persona y les dijo que tenían que salir; antes de



**Foja: 1**

irse, uno le pega un combo en su estómago, la tiran para abajo y le lanzan los pantalones y la van a tirar a la sala en donde estaban, se arrinconó por un largo tiempo. La vuelven a sacar no sabe si era de noche o de día, la desnudan y sin preguntarle nada le colocan corriente en la vagina y en los pezones, esta vez no fue en la mesa, sino que en el suelo mojado lo que la hacía saltar y golpearse en la espalda.

Señala que después uno de los torturadores comienza tocarla, por lo que se puso a gritar y a insultarlos, una la viola y el otro dijo que no le gustaban las flacas. Comenzó con una hemorragia y ellos se reían decían que eran expertos en destapar comunistas. Cuando la regresaron a la pieza se acurrucó y se acercó una mujer que llevaba más de un mes detenida, ella era socialista, y la contuvo acariciándole la cabeza, ella le contó que la habían detenido con su patrón que lo tenían en la otra pieza amarrado a una silla, ella hacía aseo en su casa y él era uno de los jefes socialistas.

Indica que un día las llevan a lavarse, les pasan una peineta para que se peinaran y les dan un café, el lolo les dice que las van a fichar y que se saquen la venda. Le sacan fotos de frente y de perfil derecho e izquierdo con un letrero en donde iba su número de carnet. Después de eso les dicen que les van a entregar a la DINA. Pasó mucho tiempo y las vienen a buscar, les ponen nuevamente scotch en los ojos, una mujer la toma, la saca y la sube a una camioneta con un toldo, cuando la están subiendo a la camioneta se dio cuenta que era la calle 18.

Expone que transcurridos tres o cuatros días desde su detención, las llevaron a Cuatro Álamos y una vez que llegaron allá las introducen en un pasillo en donde había un escritorio con un hombre que le pregunta sus datos y se queda con su carnet de identidad, de ahí la llevan a otra sala en donde había mujeres que les dicen que se desnuden y comienzan a revisarlas por todo el cuerpo, le preguntan si tiene alguna mancha o cicatriz. De ahí las hacen vestirse y las llevan a otra oficina en donde había una mujer con una máquina de escribir tomando todos sus datos, preguntándoles el nombre de su padre, donde trabajaba, el nombre de su madre y de sus hermanas y si eran comunistas.

Expone que una vez en Cuatro Álamos las dejan en una celda en donde había dos camarotes y una ventana que daba a un patio. Al otro día las sacan a Villa Grimaldi, cuando llegaron las dejan en una pieza prefabricada en donde había unos camarotes y había un guardia que le decían el abuelo o el viejo. Al cabo de una hora la sacan al interrogatorio, el interrogatorio fue más violento que los otros: golpes de puños y pies, amenazas, violación, aplicación de corriente en la parrilla en todo el cuerpo. No sabe cuánto tiempo pasó. Y de ahí la llevaron en calidad de bulto a la pieza y en la noche la trasladan nuevamente a Cuatro Álamos. Al otro día la dejaron sola en la celda de Cuatro Álamos, en un rato abren la puerta y le dicen que tiene que salir a lavarse, le pasan un jabón y una peineta y le dicen que se tiene que arreglar por que iba a venir "un viejo de las Naciones Unidas" a revisar a los prisioneros. Tienes que estar bien porque te van a venir a ver le dicen, luego la llevan a la celda y le dieron un pan y un té. Al cabo de un rato, llegó un señor que dijo que era psiquiatra de las Naciones Unidas, le preguntó su nombre y la examinó, pregunta como está y desde cuando que estaba detenida, le dejó unos paquetes de cigarrillos y unas aspirinas.

Manifiesta que al otro día la vuelven a sacar a Villa Grimaldi, en el interrogatorio vuelven a insultarla y a golpearla, le aplicaron corriente en la vagina y en las sienes, le preguntaban por una persona que estaba haciendo el servicio militar, les dijo que no conocía nadie y comenzaron a golpearla y fue nuevamente violentada. En la noche la vuelven a llevar a Cuatro Álamos. La última vez que la llevan a Villa Grimaldi las interrogó el jefe Manuel Contreras, les dice "así que ustedes son comunistas" y alguien que estaba con ella le dice que eran de un grupo folclórico, que tocaban guitarra y cantaban y que no tenían nada que ver con política.

Relata que el 4 de agosto de 1975, en la noche, las vuelven nuevamente a Cuatro Álamos y a los días ya era de noche y las llaman para el pasillo en donde las hacen firmar un documento,



**Foja: 1**

le entregan su carnet de identidad y les dicen que van a quedar en libertad, la dejaron afuera de Cuatro Álamos poquito antes del toque de queda. Al otro día fue a declarar al Comité Pro-Paz.

Expuesto lo anterior, manifiestan que los hechos arriba relatados, han sido reconocidos voluntariamente por el Estado de Chile, a través del Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura "Comisión Valech" (establecida por el Decreto Supremo N° 1.040 del año 2003), estableciendo que Eduardo Nicolás Peña Menares, se encuentra calificado como víctima de prisión política y torturas, según consta en el Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 12 de julio del año 2023.

Refieren que la tortura y privación de libertad por motivos políticos que afectó a miles de personas durante el período 1973-1990, tiene elementos comunes que estuvieron presentes durante el régimen militar, y que permiten afirmar que la prisión y tortura tenía motivaciones políticas. En el Informe Sobre Prisión Política y Tortura elaborado por la Comisión Valech, publicado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, se señala cuáles son dichos elementos, los que describen.

En relación al daño producido expresan que los hechos relatados dan cuenta clara y exacta de la magnitud de los daños físicos, emocionales y materiales que siguen presentes hasta el día de hoy. La presente acción es contra el Estado de Chile y se funda en haber sometido a detención ilegal, secuestro, prisión, torturas y apremios ilegítimos a la demandante a manos de las fuerzas militares del Estado de Chile, desde del 26 de julio hasta el 4 de agosto del año 1975.

Sostienen que María Angelica Correa Cabrera sufre el terrorismo de Estado desde el 26 de julio de 1975, siendo ella menor de edad, cuando su hogar es allanado por un grupo de agentes de civil. Fueron cerca de 10 días en que esta mujer, menor de edad, sufrió por agentes del Estado, violación, secuestro, detención y tortura.

En cuanto al derecho, sostienen que se ha verificado que el ilícito se produjo por actuaciones del Estado y sus agentes. Los cuales, organizados y amparados en un contexto de impunidad apoyados con recursos estatales, infringieron a su representado y su familia, prisión, tortura y tratos degradantes e inhumanos que califican como delitos de lesa humanidad. Lo que conlleva -como lo han señalado los tribunales de justicia- no solo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana, sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada del delito que se ha tenido por acreditado. Porque tratándose de delitos de lesa humanidad, de acuerdo con los Convenios Internacionales de Derechos Humanos suscritos por Chile, estos crímenes son imprescriptibles, estando el Estado obligado a repararlos, haciendo aplicación del Principio de Coherencia, declarando la imprescriptibilidad tanto la acción penal como la acción civil en casos de delitos de lesa humanidad. (Martínez con Fisco 2006 Corte Apelaciones Santiago).

Exponen sobre responsabilidad del Estado en la normativa nacional, indicando que los crímenes de lesa humanidad que tienen su origen en políticas estatales o de funcionarios públicos, hacen que la responsabilidad por los daños sea atribuible a una responsabilidad por falta de servicio de la administración, que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes, cargas que las víctimas, que no se encuentran obligadas a soportarlos. Esto, debido al hecho propio del Estado al haber actuado como órgano cometiendo actos ilícitos que causaron daño a las personas. Y es el artículo 42 de la Ley 18.575 (BGAE) que determina la responsabilidad patrimonial por la función administrativa al exigir la ocurrencia de falta de servicio, entendiéndola la jurisprudencia como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él (Seguel Cares con Fisco Corte Suprema rol 371-2008). Y en la relación de causalidad de la lesión con la actuación (falta de servicio) supone que se ocasione el daño, lo cual estaría ampliamente acreditado a través del certificado del



**Foja: 1**

Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el cual se le reconoce como víctima calificada de Prisión Política y Torturas por parte del Estado Chile.

Luego, describen jurisprudencia relativa a responsabilidad Estado en casos de lesa humanidad, señalando que no ha habido un tratamiento uniforme en esta materia. Mas, la jurisprudencia mayoritaria ha sido conteste con la responsabilidad extracontractual del Estado frente a los crímenes de lesa humanidad, sancionándolos conforme a las reglas del derecho internacional, aplicables en nuestro ordenamiento jurídico en virtud del artículo 5 de la Constitución Política de la República, estableciendo reparaciones íntegras, tanto para la víctima calificada como para con sus familiares, señalando de manera contundente la imposibilidad jurídica de aplicar normas del derecho común a acciones de reparación que tienen como antecedente la comisión de un hecho ilícito por parte de los agentes del Estado y que se enmarcan dentro de los delitos de lesa humanidad, declarando con ello la imprescriptibilidad de éstas acciones. Agrega que los tribunales y especialmente la Corte Suprema han hecho aplicación del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; la Convención Americana de Derechos Humanos, El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, La Corte Interamericana de Derechos Humanos entre otros. Cita fallos pronunciados sobre la materia.

En lo relativo a la prescripción, indican que reiterada jurisprudencia de esta Corte ha señalado que tratándose de un delito de lesa humanidad -lo que ha sido declarado en la especie- cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción contenidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional de acuerdo con el inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Invoca fallos al efecto.

A continuación, realizan una exposición sobre la responsabilidad del Estado a nivel de normativa internacional, expresando que la obligación de los Estados de reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos ha sido consagrada como uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado. Su carácter vinculante como principio del derecho internacional y, por tanto, aplicable como fuente de obligaciones aun en los Estados que no sean parte de dichos tratados, ha sido establecido por la propia Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sostienen que el Estado de Chile al suscribir tratados, convenciones, declaraciones y múltiples resoluciones a nivel internacional, en donde al ser parte de esta comunidad se obliga a respetar la costumbre internacional y sus principios generales, va incorporando de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales de la persona” por parte de los Estados.

En la especie, afirman que María Angélica Correa Cabrera ha sido reconocido por el Estado chileno como víctima calificada de prisión política y torturas, según consta en el Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de fecha 25 de julio del año 2023, delito considerado por el derecho internacional como delito de lesa humanidad. En virtud de ello, el Estado chileno tiene el deber de dar cumplimiento a los Tratados internacionales y principios que informan los derechos humanos a nivel internacional, lo que conlleva que de parte del Estado y de sus órganos de administración se facilite el acceso de las víctimas directas y sus familiares a las compensaciones monetarias a que tienen derecho. En este sentido, la Corte Interamericana ha dicho que la interpretación hay que hacerla en forma tal que no conduzca “de manera alguna a debilitar el sistema de protección consagrado en la Convención” y siempre teniendo en cuenta que el objeto y fin de esta “son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”.



Foja: 1

Respecto de la obligación del Estado de indemnizar a su representado, manifiestan que el demandante no solo fue condenado por el Estado chileno a sufrir apremios y tratos inhumanos y degradantes, sino que también se le condenó a sufrir hasta el día de hoy los síntomas que todo trauma de esta magnitud deja y que los especialistas del área han declarado que consisten en pesadillas, repetición mental del hecho traumático, reacción de angustia automática con gran compromiso somático y neurovegetativo, que se expresa en palpitaciones, sudoración, ahogos, cólicos, etcétera, por lo que en base a ello, solicitan que se falle ordenando indemnizar el daño causado por delitos de lesa humanidad y se condene al Fisco de Chile al pago de \$350.000.000, a título de indemnización por el daño extrapatrimonial que se le ha causado como consecuencia directa de su detención, prisión política y torturas de las que fue objeto, por obra de agentes del Estado de Chile, o a la suma que se determine.

**A folio 10** el demandado contestó la demanda, solicitando sea rechazada en todas sus partes, con costas.

Opone la excepción de reparación integral, la que funda en que el demandante ya ha sido suficientemente indemnizado con motivo de los hechos por él invocados, mediante transferencias directas de dinero (pensión anual establecida por la Ley 19.992), asignaciones de derechos sobre prestaciones estatales específicas (gratuidad en atenciones médicas, beneficios educacionales y subsidios de vivienda) y otras reparaciones de tipo simbólico (construcción de memoriales y del Museo de la Memoria, y establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido y el Premio Nacional de los Derechos Humanos).

En subsidio, opone la excepción de prescripción de 4 años, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo, a su juicio, rechazarse la demanda en todas sus partes.

Indica que tomando en consideración la época de los hechos descritos por el actor, y aun entendiendo suspendida la prescripción durante todo el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, el 12 de abril de 2021 habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesto, transcurrió con creces el plazo señalado.

Arguye que la indemnización de perjuicios, cualquiera que sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, siendo su contenido netamente patrimonial, de lo cual derivaría que la acción destinada a exigirla, como toda acción de esta índole, esté expuesta a extinguirse por prescripción, ya que a su respecto se aplican las normas del Código Civil, lo que no sería contrario a la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, por pertenecer al ámbito patrimonial.

Alega que no existiendo norma expresa de Derecho Internacional de los Derechos Humanos debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, sería menester entonces aplicar las normas de los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, los que establecen las reglas sobre la prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Cita también profusa jurisprudencia que haría suya las argumentaciones enunciadas a propósito de la excepción de prescripción.



Foja: 1

En tercer lugar, y en subsidio de las defensas anteriores, manifiesta que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable mediante una cantidad de dinero u otro medio, sin que esto devengue en una fuente de lucro o ganancia, estimando que la cifra pretendida por el actor es absolutamente excesiva, teniendo presente las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia.

Además, en subsidio, sostiene que cualquier indemnización que pudiera concederse en virtud de la sentencia que dirima esta controversia, debiera considerar los montos ya recibidos por el actor por parte del Estado, pues, de lo contrario, aquel recibiría un doble pago, ya que todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral.

Por último, asevera que los reajustes e intereses que solicita la parte demandante no proceden tratándose de una obligación dineraria que solo podría establecerse con motivo de la sentencia que resuelva la presente Litis, y además, desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

**A folio 164** el demandante evacuó la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda.

Respecto a la excepción de “reparación integral”, denominada también “excepción de pago”, alegada por el Consejo de Defensa del Estado, expresa que, aceptar que las compensaciones invocadas por la contraria tienen el carácter de reparación no se condice con el derecho convencional de derechos humanos, al estar fijados de manera general, sin ninguna consideración a cada caso en particular, y por montos que a todas luces son insuficientes.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, refiere que, por la naturaleza del delito, en cuya acción se funda la presente demanda, en que el ilícito de torturas y tratos degradantes e inhumanos, fue reconocido por el Estado y se enmarca en los delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza son imprescriptibles, no resulta posible argumentar que la acción penal es imprescriptible y la acción civil -que deriva del mismo hecho punible- no lo es. La responsabilidad del Estado chileno emana de una norma de rango constitucional, la cual ha posibilitado la incorporación en el ordenamiento jurídico nacional de las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del derecho humanitario, en los cuales se instaura el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia de los apremios ilegítimos sufridos por el demandante. Cita jurisprudencia al efecto.

En relación al contenido patrimonial de la acción indemnizatoria indica que esta indemnización que emana de delitos de lesa humanidad no puede ser abordada como mera acción patrimonial, sino como acción reparatoria y siguiendo el criterio establecido por el derecho internacional y especialmente por la Corte Interamericana de Justicia, y su consagración normativa en los Tratados ratificados por el Estado de Chile, en virtud de los artículos 5° inciso 2 y artículo 6° de la Constitución Política del Estado los cuales en su conjunto obligan a éste a reconocer y proteger el derecho a una reparación completa.

Tratándose de la improcedencia del pago de reajustes e intereses señala que esta solicitud atiende a la extensión en el tiempo que puede tener el juicio, que incide en que el monto establecido por el Tribunal sufra pérdida en su valor adquisitivo.

**A folio 16** el demandado evacuó la réplica, reiterando las argumentaciones ya vertidas en su contestación.

**A folio 17** se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertido, sobre los cuales debe recaer.



Foja: 1

A folio 35 se citó a las partes para oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, María Angélica Correa Cabrera, interpone demanda en juicio ordinario de indemnización de perjuicios, en contra del Fisco De Chile por los fundamentos de hecho y de derecho señalados en lo expositivo.

**SEGUNDO:** Que, el demandado solicitó el rechazo de la demanda en virtud de las defensas y excepciones referidas en la parte expositiva de la presente sentencia.

**TERCERO:** Que, la demandante evacuó la réplica y el demandado la dúplica en los términos indicados en lo expositivo de este fallo.

**CUARTO:** Que, con el objeto de fundamentar sus pretensiones, la demandante acompañó la siguiente prueba documental:

A folio 1

1) Certificado de nacimiento de María Angélica Correa Cabrera.

2) Certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 25 de julio de 2023, que certifica que María Angélica Correa Cabrera, se encuentra calificada como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

A folios 24, 25 y 26

3) Expediente de querrela criminal interpuesta por María Angélica Correa Cabrera en contra de los responsables por el delito de torturas infringidas por agente de la Sicar y luego Comando Conjunto, tramitado bajo el Rol Ingreso Corte N° 1281-2016 ante don Mario Carroza Espinosa, Ministro en visita extraordinaria, Tomo I, páginas 1 a 471.

A folios 27 y 28

4) Expediente de querrela criminal interpuesta por María Angélica Correa Cabrera en contra de los responsables por el delito de torturas infringidas por agente de la Sicar y luego Comando Conjunto, tramitado bajo el Rol Ingreso Corte N° 1281-2016 ante don Mario Carroza Espinosa, Ministro en visita extraordinaria, Tomo II, páginas 1 a 248.

A folio 29

5) Antecedentes de carpeta de María Angélica Correa Cabrera del Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

6) Informe Servicio Médico Legal, Protocolo de Estambul, realizado a María Angélica Correa Cabrera.

7) Declaración judicial entregada por María Angélica Correa Cabrera, en causa Rol N°1281-2016, tramitada ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

8) Querrela criminal que da origen a la causa Rol N° 1281-2016 tramitada ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

9) Desistimiento de recurso de amparo en causa Rol 876-75, interpuesto en favor de María Angélica Correa Cabrera.

10) Informe sobre Violación a los Derechos Humanos, confeccionado por la Vicaría de la Solidaridad, respecto de María Angélica Correa Cabrera.



Foja: 1

11) Informe elaborado por el equipo de salud de la Vicaría de la Solidaridad titulado "Salud Mental y Violación a los Derechos Humanos", de junio de 1989.

12) Documento titulado "La tortura un problema médico" emitido por el Equipo de Salud Mental de la Fundación Social de Ayuda de Iglesias Cristianas, de marzo de 1983.

13) Informe emitido por profesionales de la Vicaría de la Solidaridad, titulado "Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico".

14) Artículo titulado "Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos" del mes de abril del año 1987, suscrito por las trabajadoras sociales Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards y Ximena Taibo Grossi, del departamento jurídico de la Vicaría de la Solidaridad.

**QUINTO:** Que, a folio 22, se agregó a los autos ORD. DSGT N° 19967/2024, de fecha 12 de febrero de 2024, emitido por Jefe Depto. Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, mediante el cual se informa sobre los beneficios de reparación Leyes números 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874, recibidos por doña María Angélica Correa Cabrera, en su calidad de víctima de Prisión Política y Tortura (Ley Valech), con opción a pensión no contributiva como exonerada política y como cónyuge sobreviviente del exonerado político don Hernán Ramírez Larraín.

**SEXTO:** Que, sin perjuicio de no haber sido controvertido, del mérito de las probanzas descritas, resulta plenamente acreditada la circunstancia de haber sido la demandante víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973.

**SÉPTIMO:** Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que "El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado", responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley 20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

**OCTAVO:** Que, los vejámenes de que fue víctima la demandante de autos, han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo a su vez, expresas violaciones a los derechos humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4); que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5); que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7); que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17); que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por





**Foja: 1**

los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32); que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63); que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

**NOVENO:** Que, asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

**DÉCIMO:** Que, en el marco del reconocimiento de la violación de derechos humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura militar, se dictó en el año 1992 la Ley 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma que alcanza entre \$ 1.353.798 y \$ 1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de 1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

**UNDÉCIMO:** Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas "leyes de reparación", si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los derechos humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil de terror, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renunciadas permitidas y equiparidad de beneficios que involucran; sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible, como se dijo, con la misma.

A mayor abundamiento, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral.



Foja: 1

De acuerdo con lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

**DUODÉCIMO:** Que, en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, la disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los derechos humanos, la que adquiere rango constitucional.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, la prescripción extintiva de la acción deducida no puede por tanto decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del ius cogens o reglas imperativas de derecho internacional.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, en consecuencia, no existe norma internacional, como tal, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos, sino que también repararlos en su integridad.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, de esta manera, la acción resarcitoria de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de los mismos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que, en la especie y como ya se ha dicho, se ha acreditado suficientemente que el demandante fue víctima de privación de libertad y torturas a manos de agentes del Estado, luego del quiebre institucional acaecido en Chile en septiembre de 1973, lo que es bastante para haber generado en aquél secuelas como las descritas en el libelo, y también por el informe acompañado, suponiendo todo esto una inconmensurable aflicción tanto espiritual como física experimentada por el actor, difícilmente superable por el mero transcurso del



Foja: 1

tiempo, y que es consecuencial a un sistemático actuar despiadado llevado a cabo por agentes del Estado.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse el actor privado arbitrariamente de su libertad personal y luego sometido a diversas modalidades de tortura. De esta manera, las conductas materializadas por agentes del Estado de Chile produjeron el evidente daño moral padecido por la demandante, encontrándose el primero en definitiva, obligado a indemnizar al segundo.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, en relación con el quantum indemnizatorio, cabe tener presente que, mediante oficio remitido a este tribunal por el Instituto de Previsión Social, se acreditó que la actora ha sido beneficiaria de pensiones pecuniarias por parte del Estado, en virtud de las denominadas "leyes de reparación".

Debido a ello, y teniendo presente lo ya consignado, la suma que con motivo de esta sentencia se concederá al demandante a título de daño moral, se fijará en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

**VIGÉSIMO:** Que, en materia de reajustes, como no habrá de concederse una indemnización por daño emergente o lucro cesante, ni tampoco por el total de lo pretendido a título de reparación de daño moral, ninguna importancia o utilidad revisten estos accesorios para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda vez que éste va considerado en el monto que es actualmente fijado para avaluar la indemnización prudencialmente determinada.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, cabe consignar que éstos tienen por finalidad resarcir a la parte demandante por la mora en el cumplimiento de una obligación, debiendo ésta ser cierta y líquida, circunstancia que, en el caso de autos, se dará solo en el caso que la sentencia acoja la demanda y se encuentre firme o ejecutoriada, pues a contar de ese momento el demandado de no cumplir, incurrirá en mora.

Por estos motivos, se accederá a la condena del pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables, desde que el deudor se constituya en mora.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 346 N° 1, 356, 384 N° 2, 399, 402, 426, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **se declara:**

I.- Que se rechazan las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.

II.- Que se acoge, parcialmente, la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, a folio 1, sólo en cuanto se condena al demandado Fisco de Chile, al pago de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos), por concepto de daño moral, en favor de la demandante María Angélica Correa Cabrera.

III.- Que la suma decretada precedentemente deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional calculados desde que el deudor se constituya en mora.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YDQTXPRNXXP

C-18505-2023

Foja: 1

IV.- Que cada parte asumirá sus costas.

Regístrese y notifíquese.

Pronunciada por Luis Eduardo Quezada Fonseca, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C.  
en **Santiago, veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: YDQTXPRNXXP